

2. LA PRIMERA GENERACIÓN DEL POSTGRANQUISMO

Pere Ysàs

Universidad Autónoma de Barcelona

Después de la buena acogida de su primer largometraje, *Tasio* (1984), Montxo Armendáriz obtuvo la Concha de Plata de la edición de 1986 del Festival de San Sebastián con *27 horas*, un duro retrato de un segmento de la juventud de mediada la década de los 80, una juventud formada ya por quienes no habían alcanzado la adolescencia a la muerte de Franco, y que mostraban valores, actitudes y comportamientos sustancialmente distintos de los que habían asumido y expresado los jóvenes de las generaciones anteriores, incluidos los que habían protagonizado buena parte de la movilización política contra el franquismo en sus últimos años y durante la transición. Seguirían a *27 horas* películas muy notables, que continuarían mostrando el interés del director por problemas cotidianos —*Las Cartas de Alou* (1990), *Historias del Kronen* (1994)—, así como por la época franquista —*Secretos del corazón* (1997) y, en especial, *Silencio roto* (2001)—.

2.1. España a mitad de los 80

A mitad de la década de los años 80, la transición de la dictadura franquista al nuevo régimen democrático no

solo había concluido sino que éste estaba plenamente consolidado. La incorporación española a la Comunidad Europea, formalizada en 1985, era expresión de la «normalidad» política alcanzada. La Constitución de 1978 había derogado, enumerándolas una a una, la totalidad de las Leyes Fundamentales franquistas, manifestando una ruptura legal con la dictadura que, sin embargo, era menos nítida en otros planos. En 1979 las elecciones locales habían permitido que la democracia llegara a los ayuntamientos; en marzo de 1980 habían sido elegidos los parlamentos del País Vasco y de Cataluña de acuerdo con los Estatutos de Autonomía aprobados el año anterior, y en los años siguientes se completaría el despliegue del denominado Estado de las Autonomías. Por otra parte, el fracaso del golpe de estado de febrero de 1981 supondría el principio del fin de las conspiraciones militares de carácter involucionista. Por último, las elecciones generales de 1982 comportaron el derrumbe de la Unión del Centro Democrático (UCD) y la formación de un gobierno del Partido Socialista Obrero Española (PSOE), que con una campaña electoral bajo la apelación al «cambio» había conseguido una amplísima mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado¹.

Todo lo anterior muestra la magnitud del cambio político que había vivido la sociedad española en menos de una década, y que solo desde la ceguera política o desde

¹ Explicaciones generales de la transición española en Jesús A. MARTÍNEZ (coord.): *Historia de España siglo xx, 1939-1996*, Cátedra, 1999; Javier TUSELL: *Historia de España en el siglo xx. IV La transición democrática y el gobierno socialista*, Taurus, Madrid, 1999; José María MARRÍN, Carme MOLINERO y Pere YSÁS: *Historia política de España, 1939-2000*, Istmo, 2001; Charles POWELL: *España en democracia, 1975-2000*, Plaza&Janés, Barcelona, 2001.

el sectarismo extremo puede negarse o minimizarse. Sin embargo, la imagen resultante de los elementos anteriores es insuficiente para caracterizar la situación política española en aquellos años. En primer lugar, porque todo el proceso de transición estuvo plagado de incertidumbres y de tensiones, en algunos momentos muy intensas, y porque el cambio político no acabó con la violencia política, en especial con el fenómeno ETA.

Por otra parte, en segmentos significativos de la sociedad española, en particular en los que habían participado más activamente en la movilización antifranquista, las expectativas existentes al final de la dictadura —y obviamente los deseos— iban mucho más allá del cambio que realmente se materializó después. En el plano político muchos aspiraban a una forma de estado republicana y a una profunda depuración del franquismo en todos los ámbitos sociales e institucionales, imposibilitando continuidades de la dictadura en el nuevo orden democrático. Para la mayoría de antifranquistas era impensable que una buena parte del personal político de la futura democracia estuviera formado por exfranquistas reconvertidos, y más impensable aún, por ejemplo, que los policías de la Brigada Político-Social, algunos reconocidos especialistas en la práctica de la tortura a los detenidos, pudieran continuar tranquilamente en sus puestos remozados. El propio concepto de democracia era entendido en términos muchos más participativos que los de una clásica democracia representativa.

Pero las expectativas de la mayor parte del antifranquismo no se limitaban al ámbito político, sino que también se situaban en el socio-económico. Para la izquierda antifranquista, que constituía la mayor parte del antifranquismo movilizado, el fin de la dictadura debía comportar también el inicio de un proceso de transformaciones de carácter socializante que comportara un

avance claro hacia una sociedad socialista. La identificación del franquismo con el capitalismo alimentaba esas expectativas, reforzadas además por la perspectiva de transformaciones sociales en otros países europeos —recordemos, por ejemplo, el Programa Común de la izquierda francesa de 1974 o el avance del Partido Comunista Italiano en las elecciones legislativas de 1976—, así como por un contexto general de crítica al sistema capitalista, producto también de los fenómenos vinculados a los movimientos sesentayochistas.

En el País Vasco y en Cataluña, donde la movilización antifranquista había sido particularmente intensa y donde las organizaciones obreras eran particularmente fuertes, la lucha contra la dictadura había tenido también un componente de defensa de la identidad, de la lengua propia y de la cultura, y de reivindicación del autogobierno, reivindicaciones sostenidas no solamente por los partidos nacionalistas, sino por la casi totalidad de las fuerzas políticas catalanas y vascas e incorporadas a los programas de buena una parte de los partidos antifranquistas de ámbito español.

La distancia entre muchos de los deseos y expectativas y las realidades de la transición fue muy notable, especialmente en los sectores más activos políticamente que habían mostrado una notable capacidad de movilización, lo que contribuyó a la pronta aparición de un primer fenómeno de insatisfacción o, tal como fue denominado, de «desencanto». Naturalmente está fuera de lugar el discurso explicativo de tal distancia en términos de renuncias injustificadas o de traiciones de la izquierda o de los nacionalismos «moderados», porque la transición se desarrolló bajo las condiciones que determinó la realidad socio-política española, una realidad en la que los partidarios del continuismo franquista y los del reformismo pseudodemocrático disponían de notables apo-

yos, especialmente institucionales, en tanto que un sector no despreciable de la sociedad continuaba instalado en la pasividad política². Sin embargo, pienso que debe destacarse que las actitudes y los comportamientos, y a veces también las propuestas y las actuaciones, de las organizaciones políticas procedentes del antifranquismo alimentaron también ese «desencanto», que se tradujo en una notable reducción de la participación política, al margen de las fluctuaciones de la participación en las convocatorias electorales, y en una falta de atracción del compromiso político en quienes salían de la adolescencia en los años ochenta, tal vez con la excepción del mundo del ultranacionalismo vasco. La trayectoria de las formaciones de la izquierda es muy ilustrativa en este sentido; por una parte la del Partido Socialista Obrero Español y la del Partido Comunista de España, las fuerzas mayoritarias, a quienes voy a dedicar las páginas siguientes, por otra, la de los grupos ubicados en la extrema izquierda, que se extinguirían al final de la transición como resultado de sus deficientes análisis de la realidad y sus incapacidades organizativas³.

² Análisis de problemas relevantes de la transición en José Félix TEZANOS, Ramón COTARELO, Andrés DE BLAS (eds.): *La transición democrática española*, Sistema, Madrid, 1989; Manuel REDERO SAN ROMÁN (ed.): «La transición a la democracia en España», *Ayer*, 15, Marcial Pons, Madrid, 1994; Javier TUSELL, Álvaro SOTO (eds.): *Historia de la transición, 1975-1986*, Alianza Universidad, Madrid, 1996; Pere YSÀS (ed.): *La transició a Catalunya i Espanya*, Fundació Lluís Vila d'Abadal, Barcelona, 1997; Javier UGARTE (ed.): *La transición en el País Vasco y España. Historia y Memoria*, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 1998.

³ Para la trayectoria del PSOE ver, Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista Obrero Español*, Alianza Editorial, Madrid, 1988; Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Taurus, Madrid, 1996. Para el PCE el trabajo más amplio pero, sin embargo, poco satisfactorio es el de Gregorio MORÁN: *Miseria y grandeza del Partido*

2.2. La trayectoria de la izquierda: de la oposición al poder

Los dirigentes del PSOE, que era un partido muy débil al iniciarse la transición, desarrollaron un línea de actuación que situó, en primer lugar, lograr la hegemonía en la izquierda ante un PCE que había sido la fuerza fundamental del antifranquismo y que tenía una sólida implantación en casi todos los movimientos y ámbitos sociales. El éxito obtenido fue contundente: en las elecciones del 15 de junio de 1977 el PSOE logró el 28% de los sufragios frente al 9% del PCE. En segundo lugar, tras las primeras elecciones generales, los socialistas afirmaron su voluntad de convertirse en la «alternativa de poder» al gobierno de UCD, condicionando toda su actuación a ese objetivo, alcanzado cinco años después con la abrumadora victoria en las elecciones generales de octubre del 28 de octubre de 1982. Para alcanzar ambos objetivos el PSOE combinó radicalismo retórico con prácticas moderadas, apelación a la memoria histórica del socialismo y dirigentes jóvenes desligados personalmente del pasado, y construyó un potente liderazgo personal en Felipe González, algo que se estaba convirtiendo en imprescindible ante las nuevas formas de hacer política —no solamente en España— a través de los medios de comunicación audiovisuales.

Pero esa vía rápida al poder previa conversión en la fuerza hegemónica de la izquierda no se hizo sin costes. Así, la voluntad socialista de diferenciarse del PCE, e

Comunista de España, 1939-1985, Planeta, Barcelona, 1986; para Cataluña, el excelente libro de Carme CEBRIÁN: *Estimat PSUC*, Empúries, Barcelona, 1997. Sobre los grupos a la izquierda del PCE, ver Consuelo LAIZ: *La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 1995.

incluso de alejarse sistemáticamente de las posiciones comunistas, imposibilitó una mayor colaboración entre la izquierda que era fundamental para alcanzar y consolidar un régimen democrático con los menores residuos franquistas y con políticas socialmente progresistas. Por otra parte, la propuesta de abandono de la definición marxista del partido, defendida con vehemencia por Felipe González, su renuncia a la secretaría general por el rechazo del XXVIII Congreso celebrado en mayo de 1979 a tal propuesta, y el Congreso Extraordinario celebrado en septiembre con el triunfal regreso de González y la aprobación de sus propuestas, mostraba una concepción de la acción política y del liderazgo que incluía forzar a la militancia hasta los límites del chantaje para que aceptara la línea política que los dirigentes consideraban acertada para alcanzar rápidamente el poder, lo que comportó el apartamiento de la organización de militantes con una cultura política incompatible con tales prácticas y la proyección de una imagen ciertamente poco atractiva de la acción política.

Paralelamente aparecían las primeras tensiones importantes en el seno del PCE que derivaron en una profunda crisis que acabaría provocando múltiples fracturas en 1981 y 1982, diezmando a un partido que había alcanzado los 200.000 militantes. Pese a la mejora de los resultados en las elecciones generales de 1979 (10% de los votos), y los buenos resultados de las municipales, para la dirección comunista encabezada por Santiago Carrillo eran muy insuficientes y la vía para mejorarlos era una política de mayor moderación y de renunciaciones simbólicas, lo que provocó un incremento del malestar entre sectores amplios de la militancia, malestar que ya se había manifestado desde 1978 con los Pactos de la Moncloa. Este malestar se agudizó por las formas de decisión seguidas por la dirección del partido,

sin apenas someter a debate propuestas que generaban discrepancias notables. Este modo de proceder tuvo no poca importancia en la génesis de la crisis comunista puesto que implicó un choque entre las formas de actuación de buena parte de los veteranos dirigentes, en especial de los procedentes del exilio, aunque también de muchos del interior, acostumbrados a una dirección muy centralizada y a la disciplina acrítica, y sectores amplios de la militancia joven, formada en los movimientos sociales del tardofranquismo, partícipe de una cultura política participativa y crítica, poco predispuesta a la aceptación sin discusión de las decisiones de los órganos dirigentes.

En 1978 se manifestaron ya tensiones de notable entidad en la IV Conferencia del PSUC, que rechazó la propuesta de eliminar el leninismo de la definición del partido, propuesta que, en cambio, fue aprobada por el IX Congreso del PCE celebrado poco después. Santiago Carrillo se había convertido en uno de los máximos promotores del «eurocomunismo», que se presentaba como una vía democrática hacia el «socialismo en libertad», opción compartida por la inmensa mayoría de la militancia, aunque una parte de ésta estaba identificando tal concepto con una política moderada realizada básicamente en las instituciones y con renunciias simbólicas que implicaban un peligro de desnaturalización. El V Congreso del PSUC (1981) provocó una primera importante ruptura al negarse una parte de los dirigentes de la organización y la dirección del PCE a aceptar algunas resoluciones votadas por la mayoría de los delegados que, sin embargo, no iban más allá de una corrección hacia la izquierda de la política seguida anteriormente. Poco después, la crisis afectaba de lleno al PC de Euzkadi, dividido entre los partidarios de iniciar conversaciones con otros partidos de la izquierda vasca para

alumbrar una nueva formación política y los que rechazaban esta opción, apoyados por la dirección del PCE.

En el X Congreso de partido, celebrado en julio de 1981, se puso de manifiesto la magnitud de las divisiones internas que, sin embargo, no fueron resueltas. Poco después, el secretario general y los dirigentes que le apoyaban optaron por resolver las divergencias políticas por la vía reglamentista y disciplinaria, iniciando una cadena de expulsiones que afectó a dirigentes calificados de «renovadores», y que comportó una masiva desafiliación y un severo deterioro de la imagen pública del partido que presagiaba un auténtico descalabro electoral.

La crisis y desintegración de la UCD y la paralela crisis del PCE facilitó sin duda el espectacular triunfo socialista en 1982, con la promesa de un «cambio» muy inconcreto pero que alimentó nuevas esperanzas, algunas que enlazaban con las expectativas insatisfechas en los años anteriores. Sin embargo, la actuación gubernamental del PSOE resultó frustrante para muchos de los que se habían ilusionado de nuevo con la contundencia de la victoria sobre la derecha, y con el simbolismo que además implicaba la llegada al poder de quienes ideológica y políticamente procedían de la España vencida en la guerra civil. Si bien las política educativas y asistenciales socialistas respondían a lo que se esperaba de un gobierno de la izquierda, dos cuestiones provocaron pronto desconcierto y alimentaron amargos desengaños: la decisión de permanecer en la OTAN y la política económica seguida.

La entrada de España en la OTAN, decidida por el gobierno ucedista presidido por Leopoldo Calvo Sotelo en 1981, con el apoyo de las formaciones conservadoras y de los nacionalistas vascos y catalanes del PNV y de CiU, había tenido el rechazo frontal de la izquierda, que propugnaba la celebración de un referéndum conociendo

la mayoritaria oposición de la población española a la incorporación a la Alianza Atlántica. El PSOE se había comprometido a convocar tal consulta si ganaba las elecciones generales, pero, instalado ya en el gobierno, su posición sobre la OTAN empezó a modificarse hasta que, no sin tener que vencer importantes resistencias internas, formuló una nueva posición consistente en 1) el mantenimiento de España en la Alianza Atlántica pero sin integración en la estructura militar, 2) la reducción de las fuerzas militares norteamericanas en España, y 3) la ausencia de armas nucleares del territorio español.

Sin embargo la opinión ciudadana no variaba al compás de la del PSOE; las encuestas continuaban mostrando un amplio rechazo de la ciudadanía a la OTAN, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para ligar la presencia en la Alianza con la incorporación a la Comunidad Europea. El compromiso de celebración de un referéndum pesaba cada vez más sobre el gobierno socialista, por otra parte criticado sistemáticamente por su incumplimiento. Finalmente el referéndum fue convocado para el 12 de marzo de 1986, una vez formalizada la incorporación a la Comunidad Europea, en un clima de confusión y de confrontación. Confusión porque, dado el carácter consultivo del referéndum, desde el gobierno no cesaron de sembrarse deliberadamente dudas sobre como se procedería en caso del triunfar el No a la OTAN; confrontación por la dureza de los argumentos esgrimidos y las formas adoptadas. Ante la previsiones desfavorables, el gobierno utilizó todos los recursos disponibles y Felipe González lanzó la amenaza de dimitir, dibujando al mismo tiempo una situación de vacío e incertidumbre en un último intento de obtener el apoyo popular. Probablemente nunca los ciudadanos españoles, en un régimen democrático, han sido sometidos a una presión tan intensa para votar en contradicción con sus opiniones. Fi-

nalmente la propuesta gubernamental triunfó: el 52,3% de los electores votó Sí frente al 39,8% que optó por el No. Paradójicamente, muchos de los que habían llevado al gobierno al PSOE votaron en contra mientras buena parte del electorado conservador votaba a favor. El triunfo gubernamental y personal de Felipe González fue espectacular, pero, sin duda, no gratuito. ¿Qué comportó, por ejemplo, para el asentamiento de una cultura política democrática la actuación de un partido de izquierda cambiando radicalmente su posición y llevando hasta límites desconocidos la presión sobre los electores?

El PSOE había llegado al gobierno con otra promesa especialmente destacada: la creación de 800.000 puestos de trabajo. Pero la política de ajuste duro dirigida por el ministro de Economía, Miguel Boyer, si bien logró reducir la inflación, comportó la destrucción de medio millón más de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Desde luego, para muchos trabajadores el «cambio» socialista no parecía beneficiarles. Por otra parte, la política de reestructuración industrial, desarrollada básicamente entre 1983 y 1987, comportó una elevada conflictividad laboral y un serio enfrentamiento de las organizaciones sindicales con el gobierno⁴; en junio 1985, Comisiones Obreras, junto con organizaciones sindicales minoritarias, convocó una huelga general contra una reforma de las pensiones que obtuvo un notable seguimiento. Pero hasta la huelga general de diciembre de 1988 que paralizó el país, el gobierno del PSOE no modificó algunas de las políticas seguidas, que difícilmente pueden calificarse de socialdemócratas, e introdujo un «giro social» largamente reclamado por sus propias bases.

⁴ José María MARÍN ARCE: *Los sindicatos y la reconversión industrial durante la Transición*, Consejo Económico y Social, Madrid, 1997.

2.3. Crisis económica y malestar social

El inicio de la transición española coincidió con la crisis que cerró el largo ciclo de crecimiento de las economías occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. Las primeras manifestaciones de la crisis desencadenada con el incremento de los precios del petróleo aparecieron en España en 1974, si bien los gobiernos franquistas presididos por Carlos Arias Navarro, en sintonía con la posición de los empresarios, optaron por evitar adoptar medidas duras que agravaran el panorama de conflictividad social y crisis política, y que entorpecieran más todavía los proyectos continuistas. El primer gobierno de la monarquía presidido también por Arias, y el de su sucesor Adolfo Suárez, optaron por subordinar la económica a las necesidades políticas del momento; así se compensaron con cargo al presupuesto público las pérdidas que empezaban a sufrir importantes empresas, propiedad de sectores empresariales influyentes o de la gran banca, e incluso se nacionalizaron empresas que se preveía que generarían pérdidas en el futuro, pero que habían proporcionado grandes beneficios en el pasado.

Hasta después de las elecciones generales de junio de 1977, el gobierno no se sintió legitimado para aplicar una política para hacer frente a la crisis, y además consideró imprescindible el acuerdo con todas las fuerzas políticas parlamentarias. Así, la política gubernamental se fundamentó, en buena parte, en los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977⁵. La situación era ciertamente crítica: inflación incontrolada, crisis em-

⁵ Ver Joan TRULLÉN: *Fundamentos económicos de la transición política. La política económica de los acuerdos de la Moncloa*, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1993.

presariales, crecimiento del paro, déficit de la balanza de pagos, déficit público, etc. Los pactos lograron mejorar algunos indicadores macroeconómicos, pero comportaron una sensible pérdida del poder adquisitivo de los salarios; además quedaron sin cumplir muchas de las «contrapartidas» que justificaban el apoyo de la izquierda a la política de ajuste, entre las que figuraban un conjunto de actuaciones tanto de carácter estructural como coyuntural en la política educativa —por ejemplo, se establecía la creación de 400.000 plazas en EGB, 200.000 de educación preescolar y 100.000 de BUP en el año 1978—, en la política de la vivienda, en las políticas agrarias, en sistema financiero, etc.

Los Pactos de la Moncloa han sido interpretados como un intercambio de desarrollo democrático y ampliación de las políticas sociales por medidas de ajuste con duros efectos sociales. Según el texto de los pactos, estos pretendían que «los costes derivados de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales», pero la realidad fue otra. Los efectos de la política de ajuste y las limitaciones en el cumplimiento gubernamental de las «contrapartidas» contribuyó a extender el malestar social, que se manifestaría en una elevada conflictividad laboral. Impulsado desde la ultraderecha franquista, pero con receptividad entre sectores despolitizados, empezó a extenderse el slogan «con Franco vivíamos mejor», mientras desde la izquierda el «desencanto», se expresaba con la irónica frase de Manuel Vázquez Montalbán «contra Franco vivíamos mejor».

La segunda crisis del petróleo en 1979 agravó la situación de la economía española en la que, por otra parte, aparecían con nitidez algunas de las malformaciones más destacadas fruto de las políticas desarrollistas franquistas. Desde 1979 hasta mitad de la década de los

80 la economía española experimentó una recesión profunda, no solo motivada por el incremento de los precios energéticos y sus consecuencias, sino por un acusado descenso de las inversiones —se ha hablado incluso de «huelga de inversiones»— motivado por factores estrictamente económicos pero también por el malestar empresarial ante muchos de las reformas que se estaban efectuando —reconocimiento del papel institucional de los sindicatos, la reforma fiscal— y por su desapego respecto al objetivo de consolidar la democracia. Por otra parte, la crisis internacional golpeaba directamente a tres de los factores que habían intervenido decisivamente en el crecimiento del período 1960-1973: la inversión extranjera, el turismo y la emigración al exterior.

La crisis económica de los años 70 y 80 afectó particularmente al sector industrial, y a España con particular intensidad por las debilidades estructurales de la industria española. El cierre de fabricas, el crecimiento del paro y la falta de ocupaciones para los jóvenes que se incorporaban al mercado laboral, configuraron un escenario social particularmente difícil, especialmente en las áreas industriales, y en especial en aquellas con predominio de los sectores más afectados por la crisis tales como la siderurgia, la construcción naval o la industria metalúrgica de bienes de consumo. Un solo dato sobre el paro constituye un indicador suficiente: en 1973 era prácticamente inexistente, en 1977 la tasa de desempleo era del 5,7% de la población activa, en 1978 se incrementaba hasta el 7,6%; en 1982 se situaba en el 16,8% y en 1985 superaba el 21% y la cifra de parados se acercaba a los tres millones de personas.

Ante tal escenario no puede extrañar que un difuso malestar social se extendiera por la sociedad española, así como manifestaciones de conflictividad social, especialmente en los procesos de reestructuración industrial,

incluso con episodios de violentos enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas de orden público.

2.4. Los jóvenes de los 80

En este contexto socioeconómico, España tenía en la década de los años 80 la generación joven más numerosa de su historia, fruto del *boom* demográfico de los años 60. Así, si los jóvenes entre 15 y 19 sumaban 2.709.334 individuos en 1970, en 1981 alcanzaban los 3.263.312 y en 1988 los 3.284.062; en la franja de edad de 20 a 24 años y en las mismas fechas, los jóvenes pasaron de 2.548.752 a 2.942.178 y 3.313.642. Entre 1970 y 1988 el número de jóvenes se incrementó en un 25% en términos absolutos. Para esos jóvenes que a mitad de los años 80 se situaban entre los 15 y los 24 años —como sabemos el concepto de joven es variable en el tiempo—, y que estaban en la infancia a la muerte de Franco, las expectativas laborales eran radicalmente distintas a las de los jóvenes de las dos décadas anteriores, para muchos eran simplemente inexistentes, lo que condicionaba directamente todas sus expectativas personales. Algunos datos son suficientemente elocuentes. En 1979, cuando los efectos de la crisis económica sobre la ocupación eran ya notables, la tasa de empleo de los jóvenes varones de 15/16 a 19 años era el 37,4 y la de los de 20 a 24 años el 52,2; el 28,0 y el 46,0 en las mujeres jóvenes de dichas franjas de edad. En 1985 tales tasas se habían reducido al 19,2, y al 38,1 para los jóvenes y al 13,2 y al 29,6 para las jóvenes. Contrariamente, las tasas de paro habían crecido sustancialmente, del 24,2 y del 17,4 para jóvenes varones en 1979 al 57,0 y al 42,5 en 1985. El desempleo femenino, siempre superior, había crecido en ambas franjas de edad del 28,1 y 16,3 al 60,3 y

46,5⁶. Por otra parte, la calidad del trabajo había disminuido muy apreciablemente: entre 1975 y 1982 se duplicó la proporción de jóvenes con un trabajo eventual en tanto disminuían proporcionalmente los jóvenes con trabajo estable⁷. En 1989, en una nueva coyuntura económica expansiva, el porcentaje de jóvenes parados —menores de 24 años— alcanzaba en España el 34,3% del tramo de edad, casi el doble de la media de la Comunidad Europea —17,6%— situándose en la cabeza de los países comunitarios en falta de empleo para los jóvenes⁸.

La falta de expectativas laborales para los jóvenes que se deducen de las cifras anteriores se reflejaban también muy claramente en sus manifestaciones respecto a sus perspectivas laborales y vitales. El porcentaje de jóvenes entre 15 y 20 años que cursaban estudios creció entre 1977 y 1982 del 48 al 56%, aunque el de quienes compaginaban trabajo y estudio pasó del 11 al 3% en el mismo período, y el de los que «no hacen nada» creció del 3 al 9%. Pero si en 1975 el 74% de los estudiantes manifestaba que los estudios que realizaba le servirían para tener muchas o bastantes perspectivas de «éxito en la vida», en 1982 solo el 56% expresaba tal convicción y un 41% consideraba, contrariamente, que los estudios le aportaban pocas o casi ninguna o ninguna perspectiva, frente a un 27% en 1975. Por otra parte, en 1975 el 37% de los estudiantes consideraba que tendría pocas o ninguna dificultad para colocarse tras la finalización de los

⁶ INSTITUTO DE LA JUVENTUD: *Informe Juventud en España 1988*, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1989, pp. 14, 306-307.

⁷ FUNDACIÓN SANTA MARÍA: *Informe sociológico sobre la juventud española 1960/82*, Ediciones SM, Madrid, 1984, p. 37.

⁸ Carlos Alonso ZALDÍVAR y Manuel CASTELLS: *España fin de siglo*, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 300.

estudios frente al 22% que expresaba tal creencia en 1982. El pesimismo respecto a las expectativas laborales explica también que si ante la opción de obtener un buen empleo o seguir estudiando, en 1977, el 59% se inclinaba por la segunda opción frente a un 36% que elegía la primera, en 1982 el 59% se pronunciaba por el buen empleo, frente al 38% que lo hacía por los estudios⁹.

Los jóvenes de los años 80 podían disfrutar de un marco de democracia que se habían encontrado ya establecido; ello implicaba que carecían del estímulo de la lucha por la libertad que había movilizadado con particular intensidad a sectores amplios de los jóvenes estudiantes y trabajadores de los años 60 y 70. Por otra parte, muchos jóvenes de los 80 percibían que ese marco político, e incluso la actividad política, poco tenía que ver con sus problemas y sus inquietudes vitales, lo que implicó la extensión de las actitudes de desinterés e incluso de rechazo la política. Ello puede explicar, al menos en parte, el notable cambio de actitudes políticas que revelan las encuestas. En 1977 el 45% de los jóvenes se declaraba muy (11%) o bastante (34%) interesado por la política, en tanto que un 54% se interesaba poco (34%) o nada (20%). En 1982 solamente se declaraba bastante (9%) o muy interesado (2%), el 11% frente al 86,9% poco (27%) o nada (60%) interesado por la política. No menor significación tiene la autoubicación política de los jóvenes: en 1977 el 81% lo hacía en la izquierda, el 12% en la derecha y un 6% no contestaba; en 1982 los que no contestaban eran el 48%, el 32 se situaba a la izquierda y el 20% en la derecha. De todas formas, en la elecciones generales de octubre de 1982, el 40% de los

⁹ FUNDACIÓN SANTA MARÍA: *Informe sociológico Juventud Española 1960/82*, Ediciones SM, Madrid, 1984, pp. 25, 65-67.

jóvenes de 18 a 21 años de una muestra representativa estudiada votaron a las candidaturas del PSOE aunque el 33% se abstuvo¹⁰.

En otro orden de cosas, las transformaciones culturales iniciadas en los años 60, algunas impulsadas por la rebelión juvenil del 68, habían cambiado ya irreversiblemente muchas de las pautas tradicionales en relación a las relaciones interpersonales e intergeneracionales, al papel de la familia, a la libertad personal en definitiva. Por otra parte, si bien la contestación juvenil politizada había remitido claramente, se mantenía una subcultura juvenil también producto de los años sesenta, de exaltación del placer y de las satisfacciones inmediatas, alimentada paradójicamente por un consumismo que solía ser blanco de críticas feroces.

La crisis de las formas tradicionales de vida y la libertad personal consolidada, junto con las dificultades de integración social y esa subcultura de la satisfacción y el placer, más la fascinación por el riesgo y lo nuevo siempre presente en los jóvenes, favorecería la extensión de actitudes escapistas que buscaban la felicidad rápida, recurriendo una parte de los jóvenes al placer y a la felicidad artificial que proporcionaban las drogas.

2.5. 27 horas

La película de Montxo Armendáriz, *27 horas*, nos sitúa precisamente ante tres jóvenes —Jon, Patxi y Maite— en una ciudad vasca, San Sebastián, a mitad de los años 80. Apenas están al final de la adolescencia pero carecen de proyectos y de expectativas, tal como

¹⁰ *Ibid.*, pp. 198, 222, 233.

revela especialmente una conversación entre el protagonista Jon y su amigo Patxi. Con todo, las actitudes de ambos son bien distintas, Jon enganchado a la heroína, ha abandonado los estudios y su casa, y toda su actividad cotidiana se dirige a lograr el dinero necesario para la dosis diaria. *27 horas* son sus últimas 27 horas, desde las 7 de la mañana de un día cualquiera a las 10 del día siguiente. Patxi, en cambio, continua en el instituto, ayuda en el trabajo familiar y se mantiene al margen de la droga, con una actitud pragmática combinada con la resignación ante un futuro personal que en el fondo rechaza. Para el tercer personaje, Maite, enganchada también a la droga en esas *27 horas* estarán también sus últimas horas.

Armendáriz nos presenta con pocos pero vigorosos trazos el escenario de crisis y de falta de empleo: los jóvenes que esperan ser contratados para cargar un camión, el fragmento de una conversación en un bar, la espera de jóvenes y adultos en los muelles para lograr trabajar la jornada. Por otra parte, la conflictividad social y política está muy presente en la película, con la circulación de vehículos policiales, los sonidos de las sirenas e incluso las imágenes de enfrentamientos entre manifestantes y policías. El escenario donostiarra de la película apunta sin duda a la violencia callejera provocada por el ultranacionalismo aunque, como he apuntado anteriormente, la conflictividad social vinculada a la crisis económica y en particular a la reconversión industrial derivó en algunas ocasiones en enfrentamientos muy violentos en distintos lugares de la geografía española.

La película nos muestra muy levemente los cambios ya acaecidos en las relaciones familiares e intergeneracionales. Jon se ha ido de casa o le ha echado el padre. Pero las familias de los protagonistas no han sido golpeadas por la situación de crisis como muchas otras, ni están por tanto en un escenario de penuria y menos todavía de

marginación. Esto hace más llamativa la deriva de Maite y de Jon, pero con ello el director evita apuntar explicaciones demasiadas mecánicas y fáciles de determinadas conductas juveniles. Tampoco en *Historias del Kronen* los jóvenes protagonistas sufren las consecuencias de la marginalidad sino que pertenecen a familias de clase media. Pero lo que sin duda la película nos muestra más intensamente la capacidad destructiva de las drogas, en especial de la heroína, que justamente en esos años contaminó a un número no despreciable de jóvenes hasta convertirse en un problema social de notable magnitud.

27 horas nos muestra a través de un determinado escenario y de unos personajes concretos solo un fragmento muy concreto de la realidad social española de los años 80, pero un fragmento de extraordinaria dureza de una realidad que en algunos aspectos es más próxima a la actual, casi 20 años después, que a la de 10 antes, cuando el principio del fin de la dictadura coincidía con el inicio de una profunda crisis económica y con la aceleración de cambios sociales y culturales.

2.6. Ficha técnica

Título: *27 horas*. Productor: Elías Querejeta P.C. Director: Montxo Armendáriz. Guión: Elías Querejeta y Montxo Armendáriz. Fotografía: Javier Aguirresarobe. Música: Ángel Ilarramendi. Sonido: Pierre Lorrain. Montaje: Juan I. San Mateo. Dirección artística: Íñigo Altola-guirre. Interpretes: Martxelo Rubio (Jon), Jon Donosti (Patxi), Maribel Verdú (Maite), Antonio Banderas (Santa), André Falcón (tío de Jon), Josu Balbuena (Xavi), Michel Duperrer (hermano de Maite), Silvia Arrese-Igor (hermana de Jon), Michel Berasategui (padre de Jon), Esther Román (madre de Jon). Color. 93 minutos.